

Un millón de alicantinos pagarán un 19% más por el agua en 2007



MANUEL CONEJOS VALENCIA.

El Programa Agua del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no cumple con uno de sus principales lemas «agua más barata». Ayer, el secretario ejecutivo de Política Autonómica y Local del PP-CV, César Augusto Asencio, traducía esta disonancia del mensaje de Medio Ambiente que dirige Cristina Narbona y la realidad.

Asencio advirtió que para el próximo año, si no se remedia mediante una negativa general de los municipios afectados, los usuarios que dependen de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla deberán pagar un 19,44% más en el recibo del agua.

Este aumento sería sólo el relativo al incremento en la carestía del coste del agua desalada, al que habría que sumar los habituales crecimientos de IPC y factores indirectos que van aparejados al recibo del agua (alcantarillado...).

La Mancomunidad agrupa a un total de 32 municipios alicantinos, 43 de Murcia y 2 de Castilla-La Mancha y en el caso de estas localidades alicantinas la población supera ampliamente el millón de habitantes, que son los que deberán rascarse el bolsillo en las próximas facturas del agua.

El dirigente popular, a la sazón alcalde de Crevillente, explicó que este cálculo del incremento en la tarifa del agua viene especificado en el punto 4 del orden del día que se tratará en el Consejo de la Mancomunidad del Taibilla el 13 de diciembre en Cartagena, donde está la sede de la organización.

En ese punto número cuatro se debatirá la nueva tarifa del agua. En 2004 el coste del agua desalada era de 25 céntimos de euro por cada metro cúbico, en 2005 (ya en la legislatura de Zapatero) pasó a ser de 0,31 euros y este año se incrementó hasta los 0,36 euros.

51 céntimos en 2008

Para el próximo mes de enero, atendiendo al informe del Consejo de la Mancomunidad, se subirán otros siete céntimos hasta alcanzar los 0,43 euros y para 2008 la tarifa que se propone es de 0,51 euros.

La proyección, de seguir así la política hídrica de Medio Ambiente, situaría el coste para 2009 entre 0,70 y 0,90 euros, lo que supondría un coste del 104% más de lo que se pagaba a principios de 2004.

Asencio lamentó que, de esta manera, el Gobierno de España «ha incumplido su promesa de subvencionar los costes del cambio de trazado del Júcar-Vinalopó para mantener la tarifa», lo que va a provocar que se repercutan directamente en el bolsillo de los ciudadanos «las exigencias a las que en su día Zapatero cedió con ERC».

Este incumplimiento del Gobierno de mantener las tarifas ha obligado a Asencio a «llamar a la rebelión de los Ayuntamientos». El PP va a hacer un escrito que dirigirá a sus grupos municipales para evitar que se apruebe esta tarifa.

La decisión última sobre ésta corresponderá al Ministerio de Medio Ambiente pero no es lo mismo que cuenta con el respaldo de la Mancomunidad que, en caso de no aprobar ese informe, Cristina Narbona tenga que asumir en solitario la decisión de la subida. La ministra debería explicar por qué se aplica a los ciudadanos el sobrecoste del cambio de trazado del Júcar-Vinalopó y mantener la desalación como única alternativa a la derogación del trasvase del Ebro.

Programa Agua al 3%

Por su parte, el vicesecretario regional del PP-CV, Ricardo Costa, abundó en la «incoherencia hídrica de Zapatero» y explicó que el Programa Agua sólo ha ejecutado un «3% de lo que prometió hace más de dos años» y recordó que para 2007 sólo hay presupuestada una obra para la Comunidad. Además, lamentó las reducciones inversoras en infraestructuras del agua (-70%), calidad del agua (-90%), así como en infraestructuras de la cuenca del Júcar (-20%) y del Segura (-15%).

Los dirigentes populares insisten en que el nuevo trazado del Júcar-Vinalopó «nace muerto» y obedece a las exigencias que ERC mantiene en sus estatutos. Costa lamentó que «se desprecie el ahorro y la modernización de regadíos de la Comunidad» e instó a Cataluña y Aragón a ahorrar lo mismo que los valencianos porque «si lo hicieran habría 1.314 hectómetros cúbicos anuales más en el río Ebro».

Por último, César Augusto Asencio criticó que la primera suministradora de agua para los valencianos en la que piense el Gobierno sea la desalación porque es «invertir en chatarra. Dentro de siete años deberán volver a construirlas y además sin fondos europeos porque ya habremos dejado de ser objetivo 1 para la UE». Así, aboga por las transferencias hídricas de unas cuencas a otras.

MIKEL PONCE